TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Ref.: Exp. 25269-31-84-002-2018-00187-02.

Pasa a decidirse el recurso de apelación interpuesto por los interesados María Delia, Lilia Nilda, Myriam, Nidia Esperanza y Luz Stella Díaz Díaz, contra el auto de 3 de noviembre del año anterior proferido por el juzgado segundo promiscuo de familia de Facatativá dentro del proceso de sucesión del causante Leogivildo Díaz Díaz, mediante el cual denegó la solicitud de nulidad formulada por dicho extremo procesal, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

Abierto el proceso de sucesión del causante mediante auto de 18 de octubre de 2018, se ordenó la citación de los herederos del causante, con la admonición de que dentro de los veinte días siguientes a la notificación debían declarar si aceptaban o repudiaban la designación en los términos del artículo 492 del código general del proceso; las notificaciones de los interesados se surtieron entre los días 27 de agosto y 13 de septiembre de 2019, siendo reconocidos como tales por último Juan Camilo Díaz Rodríguez, en representación de su progenitor Edilberto Díaz Díaz y Oscar Giovanni Díaz Rodríguez, por auto de 9 de marzo de 2021, atendiendo lo dispuesto por el Tribunal en proveído de 4 de diciembre de 2020, cumplido lo cual se fijó fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de inventarios y avalúos, la que

dio inicio el 15 de abril de 2021 y se suspendió, una vez decretadas las pruebas solicitadas por los herederos en virtud de las objeciones que formularon, para ser reanudada con posterioridad con miras a practicar las pruebas y desatar las objeciones, cuya realización debió ser aplazada en dos oportunidades, una por solicitud conjunta de dos de los apoderados y, otra, a petición del heredero Héctor Hugo Díaz Díaz por no contar con apoderado judicial.

El 3 de marzo de 2022 pidieron los herederos María Delia, Lilia Nilda, Myriam, Nidia Esperanza y Luz Stella Díaz Díaz declarar la pérdida de competencia para seguir conociendo del proceso, petición que denegó el juzgado en auto de 19 de abril siguiente, donde hizo ver que el término previsto en el artículo 121 del código general del proceso no viene de aplicación para los procesos de sucesión, en la medida en que no existe contraparte y los interesados pueden concurrir en cualquier momento antes de la ejecutoria de la sentencia.

Ante ello, el 25 de abril siguiente, pidieron dichos interesados declarar la nulidad de lo actuado desde el 19 de abril anterior, haciendo ver que el proceso inició en 2018 y ha transcurrido más de un año sin que se dicte sentencia, no obstante lo cual el juzgado deliberadamente hizo caso omiso de la solicitud de pérdida de competencia que se elevó con anterioridad.

Previo traslado, mediante el proveído apelado el a-quo denegó esa solicitud, tras considerar que no se cumplen los requisitos para ello, pues la actuación del juzgado ha sido diligente, pero el proceso no ha podido adelantarse sin contratiempos, atendiendo situaciones como la pandemia, los actos vandálicos que sufrió la sede judicial en la que funciona el juzgado y las solicitudes de aplazamiento presentadas por las partes; en todo caso, dicho artículo no aplica en los procesos de sucesión, porque siendo un trámite netamente liquidatorio, puede concurrir interesados en cualquier momento, sin contar con que si la nulidad no fue alegada antes, se entiende saneada.

Inconformes con esa determinación, formularon recurso de apelación, el que les fue concedido en el efecto devolutivo y, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II.- El recurso de apelación

Lo despliegan sobre la idea de que ha debido decretarse la nulidad, porque previamente solicitaron que se diera aplicación a lo previsto en el artículo 121 del código general del proceso, pero sin éxito, porque el juzgado se niega a darle aplicación a esa norma procesal, no obstante que todas las actuaciones que se surtan con posterioridad al momento en que se pide decretar esa pérdida, especialmente cuando la norma que es de orden público y, por tanto, de obligatorio cumplimiento, es clara en sostener que ésta procede en cualquier proceso, de modo que cuando el sentido de la ley es claro, no puede desatenderse su tenor literal.

Consideraciones

Ciertamente, al tenor del artículo 121 del estatuto general del proceso, *“[s]alvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada”*, pues *“[v]encido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses”* y que *“[e]xcepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con*

explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso”.

Mas, aun cuando con base en dicho texto la doctrina jurisprudencial venía sosteniendo que “*este tipo de nulidad, al operar de «pleno derecho», surte efectos sin necesidad de reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo o la inacción de las partes, de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación o saneamiento*” (Cas. Civ. Sent. de 11 de julio de 2018, STC8849-2018), es bien sabido que, recientemente, la jurisprudencia constitucional descartó que esa nulidad operara en esos términos, vale decir, ‘de pleno derecho’, al punto que por ello retiró del ordenamiento jurídico la expresión que traía el predicho artículo, por considerarla incompatible con el orden constitucional, condicionando la exequibilidad del resto de la norma en lo que hace a este aspecto, sobre la base de que si aquella no obra por sí, esto es, no es autónoma ni automática, entonces es claro que “*debe ser alegada antes de proferirse la sentencia*”, como que se trata de una de aquellas nulidades susceptibles de saneamiento, “*en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del código general del proceso*” (Sentencia C-443 de 2019).

Así, se ha dicho que la “*actuación extemporánea del funcionario judicial no podrá ser convalidada y, por tanto, dará lugar a la pérdida de competencia, cuando en el caso concreto se verifique la concurrencia de los siguientes supuestos:*

(i) *Que la pérdida de competencia se alegue por cualquiera de las partes antes de que se profiera sentencia de primera o de segunda instancia.*

(ii) *Que el incumplimiento del plazo fijado no se encuentre justificado por causa legal de interrupción o suspensión del proceso.*

(iii) Que no se haya prorrogado la competencia por parte de la autoridad judicial a cargo del trámite para resolver la instancia respectiva, de la manera prevista en el inciso quinto del artículo 121 del CGP.

(iv) Que la conducta de las partes no evidencie un uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa judicial durante el trámite de la instancia correspondiente, que hayan incidido en el término de duración del proceso.

(v) Que la sentencia de primera o de segunda instancia, según corresponda, no se haya proferido en un plazo razonable” (Sent. T-341 de 2018).

Aquí, en efecto, esa nulidad viene alegándose por algunos interesados antes de dictarse sentencia, pues el proceso aún transita por la fase de las objeciones a los inventarios y avalúos, sin que el hecho de que se trate de un proceso liquidatorio impida la aplicación de esa figura, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia, implicaría incurrir en un evidente “*desatino*”, el sostener “*sin sustento jurídico alguno (...) que en los pleitos liquidatorios no regía el aludido canon 121, soslayando así el contenido de ese mandato, en el cual el legislador no previó excepción alguna; memórese, en ese precepto se estableció el lapso de duración de los juicios, sin excluir del mismo a los de la mencionada naturaleza*” (Cas. Civ. Sent. de 11 de octubre de 2018 exp. STC13221-2018, reiterada en fallo de 14 de noviembre de 2018, exp. STC14829-2018)

Y ello resulta ser así, porque la “*norma en comentario se refiere genéricamente a todos los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia gobernados por el Código General del Proceso, pues en ella no se contempló ninguna distinción en torno a la naturaleza o complejidad de la polémica. Así, todas, sin excepción, quedaron cobijadas con el mandato imperativo de «resolverse en primera, única o segunda instancia dentro del respectivo plazo legal»*”, algo natural si es que “*«los plazos de duración*

razonable» se instituyeron en beneficio de las partes y no de los operadores de «justicia», basta que aquéllas acudan a la «jurisdicción» para que se defina su conflicto tempestivamente sin importar el carácter declarativo, liquidatorio, ejecutivo o voluntario de la pretensión. Sostener lo contrario sería tanto como atentar contra la igualdad que protege el artículo 13 Superior, porque bajo ese entendimiento quienes promuevan «X» «proceso» tendrán «derecho al plazo razonable», mientras quienes adelanten el «Y», no”, de suerte que “el carácter contencioso, el número de «partes» ni el grado de dificultad que pueda suscitar un debate es indispensable para zanjarlo oportunamente, porque con independencia de esos aspectos es obligatorio acatar los «términos del canon 121» en todos los «decursos» seguidos por la cuerda del Código General del Proceso, sin exenciones de ninguna clase; so pena de las sanciones que allí se prevén” (Cas. Civ. Sent. de 17 de octubre de 2018, exp. STC13424-2018).

Claro, “el precepto analizado establece que el año para «dictar sentencia en única o primera instancia» empieza a contarse desde la «notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada», pero guarda silencio respecto de los «procesos» en que, como el de «sucesión», no se emite ninguno de esos proveídos ni existe técnicamente «parte demandada ni ejecutada»; sin embargo, esa omisión no significa que éstos «pleitos» estén exentos de la aplicabilidad del «plazo razonable» ni mucho menos de «la pérdida automática de competencia y la nulidad de pleno derecho», porque claramente sí están cobijados por tales figuras, sólo que corresponde dilucidar a partir de cuándo se inicia el respectivo cómputo y, de esa manera, colmar la laguna”, de donde debe colegirse que, “a pesar que en las causas mortuorias teóricamente no hay contraparte sí es forzoso «notificar a los herederos conocidos, cónyuge o compañero permanente» y emplazar a los terceros que se crean con interés (inciso 1º del artículo 490), lo que guarda, en esencia, estrecha similitud con la «notificación del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo en los procesos en

que sí existen demandados o ejecutados», pues en ambos contextos lo realmente importante es informar a otros sobre la existencia del juicio, a partir de lo cual las etapas comienzan a surtir generalmente en audiencia, cuya programación está a cargo del iudex, por lo que desde allí se echa a andar el pluricitado «plazo anual» (sentencia citada).

Ocurre, sin embargo, que así resulte patente que la sanción por vencimiento del término previsto en el citado precepto 121 puede invocarse válidamente en los trámites sucesorales, no puede decirse que en este caso se configuró el vicio que allana la causal invocada por los peticionarios, si es que la solicitud de pérdida de competencia se presentó el 3 de marzo de 2022, esto es, antes de que transcurriera el término de un año contado desde la data en que el juzgado señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de inventarios y avalúos (09 de marzo de 2021), que es la que siguiendo el criterio jurisprudencial aludido es la que debe tenerse en cuenta, en cuyo cómputo por supuesto debe repararse también en circunstancias como esas del cierre extraordinario que de los juzgados que funcionaban en la sede judicial de Facatativá autorizó el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca entre el 3 y el 7 de mayo de 2021 y del 1° de junio al 21 de julio de ese año (acuerdos CSJCUC21-126, CSJCUA21-41, CSJCUA21-46 y CSJCUA21-51) o las solicitudes de suspensión de la sobredicha diligencia que han elevado algunos de los interesados, pues como lo ha señalado la jurisprudencia, “*el término mencionado no corre de forma puramente objetiva, sino que –por su naturaleza subjetiva– ha de consultar realidades del proceso*” (Cas. Civ. Sent. de 18 de septiembre de 2019, exp. STC12660-2019), de suerte que en las condiciones que revela el caso es imposible considerar configurada la nulidad allí prevista, especialmente cuando, ya se sabe, existiendo dos posibilidades de cara a la existencia del proceso, la que debe primar tiene que ser, al abrigo de cualquier duda, la de su conservación.

Lo dicho basta para la confirmación de la decisión apelada. Las costas, ya para terminar, se impondrán con sujeción a la regla 1ª del artículo 365 del código general del proceso.

III. – Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto de fecha y procedencia preanotados.

Costas del recurso a cargo de los recurrentes. Líquidense por la secretaría del a-quo en el momento procesal oportuno incluyendo la suma de \$250.000 como agencias en derecho.

Oportunamente, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

German Octavio Rodriguez Velasquez

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 004 Civil Familia

Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c887008db8254e92558f02c17c5f5f276633b47c19ee4ea2976ee0e9c6ac71ba**

Documento generado en 13/03/2023 03:50:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>